



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Ramos Antón, Consejero  
Sr. Sobrini Lacruz, Consejero y  
Ponente

Sra. García Fonseca, Secretaria

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 28 de julio de 2017, ha examinado el *propuesta de Convenio en materia de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017-2020, entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA)*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## **DICTAMEN**

### **I**

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

El día 4 de julio de 2017 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre *el proyecto de convenio entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA) y el Consorcio de Compensación de Seguros, en materia de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017-2020*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con la misma fecha, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 314/2017, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Sobrini Lacruz.

**Primero.-** El 20 de junio de 2017 el Consejero de Sanidad solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre el proyecto de convenio entre la Gerencia Regional de Salud, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (en adelante "Unespa") y el Consorcio de Compensación de Seguros, para la asistencia sanitaria a lesionados en accidentes de tráfico en los ejercicios 2017-2020.

En el expediente remitido consta la siguiente documentación:

- Comunicación a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos con carácter previo al inicio de la tramitación del convenio, de 9 de marzo de 2017.

- Borrador del convenio que pretende autorizarse, de 27 de febrero de 2017.

- Informe del Servicio de Colaboración y Cooperación de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, en el que se señala "que de los antecedentes obrantes en el Registro General Electrónico de Convenios al día 16 de mayo de 2017, no consta inscrito en el mismo, ninguno vigente con sujetos y objeto similar que pueda afectar al que se pretende suscribir".

- Informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad de 25 de mayo de 2017.

- Memoria económica de 3 de marzo de 2017.

- Informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de junio de 2017.

- Borrador de acuerdo de la Junta de Castilla y León, sin fecha ni firma, por el que se autoriza al Presidente de la Gerencia Regional de Salud a la formalización del convenio.

**Segundo.-** El proyecto de convenio consta de ocho estipulaciones, una estipulación adicional y una estipulación final y va acompañado de cinco anexos.

La estipulación primera recoge el objeto del convenio; la segunda, la vigencia; la tercera, los hechos sujetos y determinación del obligado al pago; la cuarta regula las normas del procedimiento; la quinta se refiere a la Comisión de Vigilancia y Arbitraje; la sexta a la publicidad y comunicaciones; la séptima, regula la Comisión Paritaria y la octava las altas y bajas.

La estipulación adicional recoge el compromiso de las partes firmantes del convenio de la creación durante su vigencia de un grupo de trabajo que establezca la metodología para el análisis y cuantificación de los costes por proceso (GRD).

La estipulación final contiene la declaración relativa a que las partes firmantes del convenio manifiestan su voluntad en el cumplimiento estricto de las estipulaciones acordadas, en beneficio de sus mutuas relaciones, como en el de los perjudicados amparados por el seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor de suscripción obligatoria.

El anexo I se refiere a las condiciones económicas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020; el anexo II al modelo de partes de asistencia; el anexo III al modelo de declaración responsable; el anexo IV a la relación de centros asistenciales y el anexo V a la relación de entidades adheridas.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el apartado tercero, 1.d) del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

Cabe recordar que el indicado precepto de la Ley 1/2002, de 9 de abril, concuerda con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, que

dispone que "Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, sólo se podrá transigir, judicial o extrajudicialmente, sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad, y someter a arbitraje las contiendas que se susciten acerca de los mismos, si lo autoriza la Junta de Castilla y León, previo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y cuantos otros sean preceptivos".

**2ª.-** La forma de la autorización para el sometimiento a arbitraje de determinados derechos de la Hacienda de la Comunidad es la de acuerdo de la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según el cual "Adoptarán la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y las de su Presidente". Es correcto, por otra parte, la firma del acuerdo por el Presidente de la Junta de Castilla y León y por el Consejero autor de la propuesta, pues así se prevé expresamente en el apartado 4 del artículo 70 de la referida Ley 3/2001, de 3 de julio.

En cualquier caso debe entenderse que, al informar favorablemente el convenio en los extremos objeto de dictamen, se autoriza su firma y el sistema de arbitraje previsto en él, especialmente en cuanto a las facturas discutidas.

**3ª.-** En relación con el fondo del asunto, este Consejo se pronuncia sobre el contenido del convenio únicamente en lo que supone un sometimiento a arbitraje de derechos de la Hacienda Autonómica, pues su competencia, conforme a lo señalado anteriormente, se limita a ese aspecto del documento que pretende firmar la Gerencia Regional de Salud.

En el convenio se regula la prestación de servicios de asistencia sanitaria a lesionados en accidente de tráfico en el ámbito de la sanidad pública, así como el procedimiento objetivo para su facturación. Tal facturación tiene su encuadre en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, el cual establece en su anexo IX que, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad y en la disposición adicional 22 de la Ley General de Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio [actualmente, disposición adicional décima del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo

8/2015, de 30 de octubre] los servicios públicos de salud deberán reclamar a los terceros obligados al pago el importe de la atención o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas en los supuestos, entre otros, en los que exista seguro obligatorio de vehículos a motor; en los casos de existencia de convenios o conciertos con otros organismos y entidades, de acuerdo con los términos del convenio o concierto correspondiente y, en general, en cualquier otro supuesto en el que, en virtud de normas legales o reglamentarias, otros seguros públicos o privados o responsabilidad de terceros por las lesiones o enfermedades causadas a la persona asistida, el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias deba ser a cargo de las entidades o terceros correspondientes y no con cargo a los fondos comunes de la Seguridad Social o de los Presupuestos Generales del Estado adscritos a la sanidad.

Estos ingresos, conforme a los artículos 16.3 y 83 de la mencionada Ley General de Sanidad -preceptos de carácter básico-, tendrán la condición de propios de los Servicios de Salud y en ningún caso podrán revertir directamente en aquéllos que intervienen en la atención de estos pacientes.

El convenio objeto de examen (en la medida que prevé una Comisión y una Subcomisión de Vigilancia y Arbitraje, a las que se asigna entre sus funciones específicas la de intervenir, en el caso de falta de acuerdo sobre el contenido o el importe de las facturas entre las partes, con el carácter de árbitro, a los efectos de lo previsto en los artículos 12, 15.2 y 25 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y cuyas resoluciones tienen la consideración de laudo), supone ciertamente un caso de sometimiento a arbitraje de una contienda suscitada acerca de los derechos de la Hacienda de la Comunidad.

El Consejo Consultivo de Castilla y León considera que el proyecto de convenio sometido a consulta puede ser aprobado. En especial, entiende que el sistema de arbitraje previsto en él salvaguarda convenientemente el interés general, a cuyo servicio debe ponerse siempre toda actuación de las Administraciones Públicas, conforme a los artículos 103.1 de la Constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El sistema lleva a la práctica, en particular, el principio de eficacia, contemplado también en tales preceptos, además de en el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Pondera este Consejo, a la hora de emitir este juicio, no sólo el carácter eminentemente práctico y resolutorio del sistema de solución de conflictos sobre facturas discutidas por las entidades aseguradoras que se prevé en el convenio, deducido de su propio mecanismo de actuación y del contexto en el que se inserta, sino también que su aplicación supondrá, sin duda, un beneficio para el interés general de la Hacienda Autonómica, en la medida en que se evita judicializar las discrepancias que surjan al respecto y, por otra parte, se facilita el rápido cobro de todas las facturas no discutidas.

Finalmente, este Consejo tiene en cuenta los numerosos Convenios que, con similares características -incluyendo los de arbitraje-, se han ido firmando desde 1989 entre el Consorcio de Compensación de Seguros, Unespa, el entonces Instituto Nacional de la Salud (Insalud) y actualmente las instituciones públicas autonómicas sanitarias competentes. La repetición en el tiempo de estos pactos ofrece una cierta seguridad en que el sistema de cobranza de derechos económicos y el arbitraje en ellos contemplado son beneficiosos en su conjunto para los intereses generales de la Administración, lo que facilita el ingreso en las arcas públicas de importantes cantidades de dinero que, en otro caso, entrarían en ella con mucho más retraso. Queda así salvado directamente el interés general económico de la Administración Sanitaria Autonómica.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica en su informe de 15 de junio de 2017, en cuanto a los precios contemplados, en relación con los establecidos en el Decreto 83/2013, de 26 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de la Comunidad de Castilla y León y la tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas que, entre otros, actualiza el Decreto 25/2010, de 17 de junio, sobre los precios públicos por actos asistenciales y servicios sanitarios prestados por la Gerencia Regional de Salud.

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Puede someterse a la aprobación de la Junta de Castilla y León el proyecto de convenio entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), en materia de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017-2020.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.